

cedimientos penales de la CDF han estado muy presentes en la vida de la Iglesia en estos últimos años.

Por otra parte, es complicado evaluar individualmente cada formulario: de manera general podemos afirmar que están realizados con rigor y utilizando una terminología cuidada. En relación a los formularios que utiliza la CDF, constatamos su forma de proceder y los actos formales que realiza, sin juzgar si es la manera más oportuna o no de formalizarlos jurídicamente, o si hubiera sido preferible realizarlos de manera diferente. Y como ya hemos apuntado, las explicaciones de los mismos son acertadas.

Como valoración final podemos señalar que estamos ante un buen trabajo, insustituible para todo operador del derecho canónico, en el que no sólo se hace una aproximación a las normas incluidas en el volumen, sino que se da una visión de conjunto, presentada de una manera práctica, que posibilitará un avance en toda la tramitación de las causas penales, especialmente en las concernientes a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Por todo ello, pensamos que es un libro que todo vicario judicial y juez ha de tener.

Gerardo NÚÑEZ

---

**Montserrat PERALES AGUSTÍ (ed.),** *Procesos matrimoniales canónicos*, Asociación Española de Canonistas - Ed. Dykinson, Madrid 2013, 188 pp., ISBN 978-84-9031-816-4.

El volumen editado por la editorial Dykinson recoge las ponencias presentadas en una Jornada de Estudio que, en su momento, tuvo lugar en Madrid y que se ocupó de los procesos de nulidad canónicos, así como de las nuevas competencias que, con el M. Pr. de 1-X-2011, fueron atribuidas al Tribunal de la Rota Romana. Se trata de un volumen de mucho interés por los temas que se desarrollan, así como porque las contribuciones están firmadas por autores muy significados. Concretamente esos autores son: dos Auditores del Tribunal romano, monseñores De Angelis y Heredia; dos Auditores del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España, el Decano monseñor Carlos Morán y monseñor Enrique de León; y, por últi-

mo, y ya para referirse a las nuevas competencias del Tribunal de la Rota Romana, el profesor Rodríguez-Chacón. Teniendo en cuenta la relevancia de los ponentes se comprende que debamos calificar el libro de imprescindible para despachos y bibliotecas interesados en los procesos canónicos de nulidad, así como para quienes necesiten actualizarse sobre el Tribunal de la Rota Romana.

Al final señalamos quienes son los responsables de la edición, pero de inmediato presentamos las ponencias. Lo hacemos haciendo una selección propia de lo que juzgamos de interés en cada una, pero sin duda el lector encontrará no solo lo que aquí decimos, sino mucho más y, sobre todo, la justificación y explicación de los temas que aquí sólo barruntamos.

Se inicia el libro con la larga contribución de Carlos Morán, Decano de la Rota de la Nunciatura de Madrid (pp. 25-130). La ponencia versa sobre *Criterios de actuación de los miembros del Tribunal y los abogados en el desarrollo del proceso de nulidad*. Nos ofrece una serie de principios que deben estructurar el buen obrar de los tribunales de la Iglesia. Sobre la *primacía de la verdad* (pp. 26-43) como primer criterio del obrar forense canónico, señala variadas cuestiones prácticas. Enumeramos algunas de esas cuestiones para evidenciar que el A. no se queda en cuestiones teóricas. Así, en lo que se refiere al juez, entre otros criterios, destacamos los siguientes: la importancia de evitar las declaraciones preparadas o manipuladas; que en su labor deje constancia sobre los hechos que se declaran; que debe procurar incorporar a la demanda todo lo que se pueda de procesos de separación o divorcio anteriores, y no sólo de las sentencias; que debe recoger en las actas las palabras mismas de las declaraciones, evitando interpretaciones. En relación con los abogados se extiende explicando la correcta proposición y práctica de pruebas. Sobre el defensor del vínculo incide en que «no es una especie de asesor del juez, (...) no es una figura meramente formal, sino que su presencia efectivamente [debe ser] un elemento clave para el desarrollo del proceso» (pp. 40-41). El defensor del vínculo puede hacer propuestas sobre el examen de las partes y de los testigos, puede pedir aclaraciones sobre los informes periciales; debe participar diligentemente en las peticiones de las partes privadas; incluso, en caso de disconformidad con la sentencia, valorará si se debe interponer querrela de nulidad y apelación.

Morán continúa su relación explicando el sentido de la *búsqueda de la verdad* en las causas de nulidad. Lo hace apoyándose en el magisterio reciente y en su amplia experiencia judicial (pp. 43-48). Después, explica que todos los que intervienen en el proceso deben «actuar como ‘guardianes’ del sistema legal vigente. Dejando para la investigación y publicación las cuestiones de *iure condendo*». Concreta algunas situaciones que en el proceso exigen tener muy en cuenta la particular dependencia legal y jurisprudencial. Así, la prohibición de apropiarse indebidamente de una causa; la obligación de tratar las causas según el orden que figura en el registro de entrada; la obligación del tribunal de proveer de modo que la parte pueda ser asistida por patrón; la obligación de declarar la ausencia del demandado; la necesidad de la precisión a la hora de fijar el *dubium*; la obligación de motivar los decretos decisorios, etc.

El mismo A. continúa considerando *la necesidad de obrar según ciencia y conciencia* (pp. 54-59). Después, sobre la *dignidad y lealtad profesional* (pp. 59-74), explica dimensiones deontológicas que afectan al juez y las que afectan a los abogados. Entre las concreciones al respecto señala la prohibición de eludir la competencia de tribunales que se valoren como menos favorables, que puede llegar a suponer un fraude de ley; la imposibilidad de renuncia que afecta a los abogados «estando la causa pendiente, sin una razón justa». Como era de suponer el A. se extiende en lo que se refiere a honorarios y sobre los intentos de prevaricación. Pasa a considerar las necesarias *independencia y libertad personal* de jueces y abogados (pp. 79-90), deteniéndose en múltiples deta-

lles prácticos: régimen de incompatibilidades (por actuación en distintas instancias, o con responsabilidades diferentes, imposibilidad de aceptar causas con implicaciones personales, prohibición de aceptar regalos, libertad en la designación de peritos...). Los siguientes apartados de este trabajo son sobre *la diligencia y celeridad en la tramitación de las causas* (pp. 90-93), sobre *el principio de información y reserva* (pp. 93-100), y sobre *la dimensión vocacional del quehacer jurídico* (pp. 102-106). Termina con un amplio apartado sobre *la necesidad de recurrir a las medidas disciplinarias y a los mecanismos sancionadores* (pp. 106-113), en donde juzga como suficientes los mecanismos que prevé la legislación universal para corregir irregularidades e infracciones, a la vez que va explicando las posibilidades punitivas previstas en relación con ilegítimos actos de jueces y abogados. Propone que, como medio para lograr una mejor actuación de los tribunales y, en su caso, para evitar irregularidades, los obispos deberían prever reglamentos de su tribunal.

La siguiente contribución es de Agostino De Angelis (†), Auditor del Tribunal de la Rota Romana, y lleva por título *Propuestas para una más rápida resolución de las causas matrimoniales (con particular referencia a las cuestiones incidentales, al proceso breve y a la ausencia de parte)*. Dentro de los límites que se propone, la ponencia comprende soluciones de praxis procesal todas compatibles con las normas vigentes; algunas ya han sido ampliamente utilizadas por los tribunales. Varias de esas propuestas han sido objeto de deliberación del Colegio Rotal romano y tienen, por tanto, el valor de propuesta autorizada (cfr. p. 116).

Citemos algunas de las propuestas del A. en relación con el *proceso de primera instancia*: el juez debe cumplir lo previsto en el c. 1466, de modo que cuando la ley no señala plazos, él mismo debe determinarlos; conviene que el juez, en el decreto de citación, proponga siempre la fórmula de la duda, y señale a las partes el término perentorio de quince días para proponer excepciones o la oportuna demanda reconvenzional; resulta «útil concordar los capítulos según las previsiones del Código sin ulteriores determinaciones, por ejemplo por defecto de discreción de juicio, sin la ulterior especificación de defecto de libertad interna» (p. 118); para la admisión de nuevos capítulos dentro de una demanda no se necesita causa grave, basta el *fumus boni iuris*, y el acuerdo del Turno, teniendo en cuenta el voto del defensor del vínculo. El A. pasa a considerar una de las causas que más pueden retrasar el proceso: la ausencia de la parte demandada. Ante este hecho indica criterios de actuación, diferenciando el caso de ausencia por contumacia, del caso de ausencia por ignorancia del domicilio de la parte. El juez, para evitar que durante la fase de la discusión judicial se produzcan retrasos, debe fijar plazos para el desempeño de la defensa. En la parte dispositiva de las sentencias se deben evitar fórmulas poco claras, del tipo «capítulo absorbido»; y en el caso de utilizar ese tipo de expresiones, deben ser explicadas, sólo así se evitarán dudas interpretativas en instancias superiores.

Después el A., y ya en otro apartado, hace algunas sugerencias en relación con la *praxis relativa al proceso breve de confirmación de la sentencia*. En este momento procesal, aunque la transmisión de la

causa se realiza *ex officio*, si el nuevo tribunal conoce la voluntad de las partes de no proseguir el juicio, el ponente debe mandar el archivo de la causa. Esta es la praxis acordada por el Tribunal romano. Sobre este proceso de confirmación de la sentencia, advierte que ha sido muy diversamente valorado el momento inicial de estudio para resolver si se confirma o no la sentencia de primer grado y, en su caso, pasar la causa a trámite ordinario. Juzga el A. que ese estudio preliminar puede retrasar todo, pero sólo cuando las sentencias estén insuficientemente motivadas. Además se adhiere a la reconocida opinión de Moneta que posibilita que las partes pidan saltar esa primera fase sumaria pasándose al estudio ordinario. Esto puede ser de interés de las partes, sea para evitar la dilación sea para evitar la consideración inicial desfavorable que pudiera pesar negativamente en la evaluación final confiada al mismo colegio (cfr. p. 127). Recuerda también que el Tribunal romano estima que incluso la total omisión de la valoración inicial, pasándose directamente al estudio ordinario, no supone negación del derecho de defensa ni nulidad de la sentencia de segundo grado. Mons. De Angelis se hace eco de una consideración no por todos aceptada: juzga que el Turno señalará «los motivos que obstaculizan la confirmación de la sentencia; si después no se indica la instrucción suplementaria que debe realizarse, parece evidente que los motivos alegados no son superables y que la causa está destinada a una sentencia negativa. La praxis de explicitar en el decreto que la causa no permite una decisión afirmativa constituye una invitación a las partes para no proseguir una causa infundada» (p. 129).

En un apartado sobre las *cuestiones incidentales* (pp. 130-134), el A. orienta a evitarlas o resolverlas rápidamente. Entre otras cosas recuerda que, ante la acusación de nulidad de actos procesales, no cualquier violación de la norma supone nulidad del proceso, así como tampoco cualquier violación del derecho de defensa supone necesariamente nulidad insanable de la sentencia. Al respecto se hace necesario distinguir entre negación del derecho de defensa y el ejercicio de ese derecho, pues no siempre resultan equiparables. Termina este A. considerando la *nulidad derivada de las decisiones*; valora hasta qué punto una sentencia de segundo grado es dependiente de una de primer grado. Juzga que no es «un principio absoluto que una sentencia nula impide los ulteriores grados de juicio y que, si es declarada nula en el futuro arrastre consigo a las sentencias sucesivas por nulidad derivada» (p. 139).

Felipe Heredia, Auditor de la Rota de la Nunciatura de Madrid en el momento en el que pronunció la ponencia, y en el momento actual Auditor de la Rota Romana, se ocupa del *Cambio y ampliación de la 'causa petendi' en el proceso, a la luz de la conformidad equivalente de sentencias*. Sobre la «conformidad equivalente», introducida en el cuerpo normativo por medio del art. 291 § 2, de la *Dignitas connubii*, recuerda la preeminencia del *hecho* que hace nulo el matrimonio, sobre el *nomen iuris*, y con ello de la *causa petendi* sobre dicho *nomen iuris* (p. 142). Teniendo en cuenta esto, el A. procura, en primer lugar, «precisar la noción de *causa petendi*, es decir del hecho jurídico irritante (...) para captar su directa relación con la conformidad equivalente y entender mejor su significado». En una segunda par-

te considera si la «conformidad equivalente produce o no alguna repercusión en el posible cambio o ampliación de la *causa petendi*» (p. 145).

Recuerda Heredia que los hechos que pueden causar la nulidad «pueden no coincidir con un único capítulo de nulidad. Por tanto, el viaje conjunto que *causa petendi* y *nomen iuris* inician durante el proceso no siempre será coincidente ni exclusivo. Lo determinante vendrá dado por los hechos, mientras que su calificación jurídica, siendo de trascendental importancia, ocupará un segundo lugar. Todo cambio que haga referencia a la *causa petendi*, en buena lógica, debe afectar al *nomen iuris*, pero no necesariamente a la inversa» (p. 150).

Sobre la posible ampliación o modificación de la *causa petendi* a la luz de la conformidad equivalente, indica que «lo que cambia en la conformidad equivalente es el *nomen iuris* del capítulo de nulidad o calificación jurídica, pero nunca la *causa petendi*» (pp. 153-154). Muestra que para evitar una sentencia injusta son los mismos hechos los que pueden justificar la ampliación de la fórmula de dudas con un nuevo *nomen iuris*. Estaremos ante unos mismos hechos que se consideran desde otra perspectiva jurídica. En dependencia de lo que ya había considerado la jurisprudencia y se determina en *Dignitas connubii*, se sitúa ante diversas posibilidades que pueden plantearse en las causas. Así recuerda que no cabe que en la sentencia el tribunal asigne un *nomen iuris* al hecho que hace nulo el matrimonio, distinto de lo determinado en el decreto de la fijación del *dubio*. No cabe ese sentido de conformidad, no se puede resolver por un capítulo que no fue pedido por las partes, que no aparece

en la fórmula de dudas. Por el contrario no afecta al derecho de defensa, y se entenderá como conformidad equivalente, la siguiente actuación: si en una segunda instancia se concuerda un nuevo capítulo para que sea juzgado en primera instancia, «el tribunal dicta sentencia estimando afirmativamente el capítulo de nulidad juzgado en primera instancia y podrá declarar equivalentemente conformes ambos capítulos de nulidad porque se fundan en la misma *causa petendi*, aunque ambos fueron formalmente juzgados en una primera instancia por dos tribunales de distinto grado. En efecto, la sentencia del tribunal de segunda instancia, aunque sea formalmente de primer grado, es en realidad una segunda instancia sobre la misma *causa petendi*» (p. 155).

El tema del que trata Enrique de León, Auditor de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España, se titula: *Publicación de las actas, privacidad de los hechos y prueba secreta* (can. 1598 § 1 CIC 1983 / art. 230 DC) (pp. 157-169). Propiamente, el escrito versa solo sobre la prueba secreta. El tema tiene suficiente entidad y dificultad como para que el A. lo considere en exclusiva. Entre otras hipótesis posibles, se estudian y resuelven dos situaciones diferentes de las que ofrecemos una consideración sintética que, lógicamente, sólo pretende animar a una completa lectura de las argumentaciones ofrecidas por el A. La primera de las hipótesis es la siguiente: cuando por gravísimas razones, se reúnen estos requisitos: «no permitir la presencia de los abogados en la práctica de la prueba; no darla a conocer con posterioridad, contrariamente a lo que disponen los arts. 157 § 2 y 159; declarar ese acto secreto también en el momento de la publicación» (p. 164).

Teniendo en cuenta esto, juzga el A. que esa prueba no puede ser tenida en cuenta para la resolución de la causa. La segunda situación a la que se refiere es la «de un acto o prueba que conoce el abogado o ha estado presente en su práctica; [pero] a raíz de su contenido y para evitar peligros gravísimos (art. 230) en el momento de la publicación se decide mantener en secreto» (p. 164). En este segundo caso el A. estima que «si fuera decisiva para llegar a la certeza moral por parte del Tribunal, tendría que darse a conocer en todo caso, pues de lo contrario no solamente se conculcaría el derecho de defensa, sino que necesaria y simultáneamente no se respetaría el principio de alcanzar la verdad, pues se privaría a la otra parte de la posibilidad de dar luz sobre esa prueba y, tal vez, desvirtuarla (...) si no es decisiva, se podría declarar secreta siempre que las consecuencias de su revelación fueran gravísimas» (p. 165). Señala el A. que los abogados, conociendo la prueba, pueden considerar que la prueba es decisiva; en esa situación no «parece fácil conciliar la declaración de secreto de una prueba con el derecho de defensa» (p. 165).

El A., que desciende a presentar casos concretos, no deja de valorar los principios generales que afectan a la posibilidad e imposibilidad del secreto según establecen distintos artículos de la *Dignitas connubii*. Entre otros los siguientes: que nadie está obligado a presentar documentos que no puedan mostrarse sin peligro de daño, y que no pueden admitirse pruebas bajo secreto, a no ser por causa grave y asegurando su notificación a los abogados de las partes.

La última ponencia que se recoge en el libro, a diferencia de las anteriores no

está presentada por un Auditor rotal. En su momento presentó esta ponencia, y ahora la publica, un eminente canonista, el profesor R. Rodríguez-Chacón, particularmente experto en causas matrimoniales canónicas, y que se ocupa de un acto normativo que ha variado las competencias del Tribunal de la Rota. La contribución se titula '*Quaerit semper*'. *Una aproximación al documento* (pp. 171-188). En aquella Jornada en la que intervinieron Auditores de Roma y de Madrid, muy acertadamente se pidió esta contribución a quien, sin tener responsabilidad como juez, es verdaderamente experto en los Tribunales. El título de la ponencia, al decir que se trata de una *aproximación* resulta adecuado –aunque sólo en parte–, porque aquí se ofrece una consideración sintética de lo que en otros lugares ha publicado el A. de una forma más amplia. Ahora bien, hemos dicho que esa calificación de *aproximación* solo en parte es adecuada por lo que señalamos a continuación. Se trata de una consideración muy oportuna y precisa. Ofrece los elementos necesarios para situar el acto normativo, destacándose no solo su parte dispositiva, en la que se concretan las dos competencias transferidas al Tribunal de la Rota (*dispensa del matrimonio inconsumado* y las *causas de nulidad de la sagrada ordenación*), y que antes dependían de otros dicasterios, sino valorando formalmente tanto el acto en general como dichas competencias, así como el encaje orgánico del nuevo Oficio que se ha creado. Todo esto, además, se acompaña de una muy amplia bibliografía. Es decir, aunque el A. lo presente como síntesis, cualquier lector lo reconocerá como contribución valiosa, verdaderamente oportuna, precisa y científicamente profunda.



Digamos finalmente que la Jornada, que en su momento organizó el estudio de los temas que ahora se editan, había sido convocada por la Asociación Española de Canonistas. Por esta razón los responsables de la Asociación, la actual Presidenta, profesora María Elena Olmos, y el anterior Presidente, profesor Jorge Otaduy, ofrecen unas primeras páginas explicando el sentido de aquella Jornada. Después, y ya de manera más amplia, la coordinadora de la edición, la profesora Montserrat Perales Agustí, presenta una palabras de *Introducción* (pp. 17-24). No queda más que felicitar a la Asociación por la iniciativa que dio lugar a este volumen, y a la editora por su publicación. Esperamos que la Asociación

siga con ese interés por las causas de nulidad y por organizar eventos en los que jueces de los Tribunales eclesiásticos presenten las cuestiones doctrinales y prácticas. Por encima de cualquier otro tipo de estudios, todos estamos en dependencia de la doctrina judicial, y no sólo en dependencia de las concretas sentencias, sino también en dependencia de estudios doctrinales que sistematicen las cuestiones debatidas. Es evidente que quienes tengan algún tipo de responsabilidad en el foro matrimonial canónico tendrán muy en cuenta las valoraciones doctrinales de quienes son los responsables de los más altos tribunales.

José A. FUENTES

---

**José Luis SÁNCHEZ-GIRÓN – Carmen PEÑA (eds.),** *El Código de Derecho Canónico: Balance y perspectivas a los 30 años de su promulgación*, Biblioteca Comillas Derecho Canónico 04, Universidad Pontificia Comillas, Madrid 2014, 469 pp., ISBN 978-84-8468-526-5.

Esta obra recoge las actas de un Congreso internacional celebrado en Madrid, los días 12-14 de diciembre de 2012. Se organizó pensando en el ajustamiento del derecho canónico a las exigencias eclesiales y sociales, lo que llevó a los organizadores a favorecer una reflexión conjunta de especialistas encaminada a vislumbrar hasta dónde deberían ir las futuras reformas del derecho canónico, punto de partida que es verdaderamente estimulante (aunque habrá que ver cuáles son las consecuencias efectivas de dichas propuestas, cuando aquellas otras hechas por los Presidentes de dicasterios de la Curia Romana cinco años

antes, con motivo de los 25 años de promulgación del CIC, no parece que hayan prosperado). Por eso, las ponencias cubren todos los libros del Código vigente así como otras cuestiones de interés y actualidad reguladas por normas extracodiciales.

La ponencia inaugural relativa al *Derecho canónico entre los dos códigos* (pp. 23-33), fue dictada por el prof. J. M. Díaz Moreno, emérito de la Universidad Pontificia Comillas y de la Universidad Pontificia de Salamanca. Destaca el estudio del derecho canónico tras la promulgación del primer *corpus* oficial, en un ambiente que cualifica de triunfalista,